

INTRODUCCIÓN

LOS TÉRMINOS DE LA DISCUSIÓN

El 26 de julio de 2001, *The Economist* tituló un artículo de portada: “An alarm call for Latin American’s democracy”. Refería que los latinoamericanos están renunciando a su apoyo a la democracia y, prácticamente, uno leería, asomándose al pasado. ¿Qué bases o elementos tenía a su disposición este difundido medio sajón para ofrecer una afirmación tan lapidaria como preocupante? Por el contrario, desde el extremo sur de la región, Cheresky y Pousadela (2001: 21) exponían en el mismo año: “Las nuevas democracias latinoamericanas no parecen estar seriamente amenazadas por un retorno al pasado. Las inclinaciones democráticas han echado raíces en las sociedades latinoamericanas”. ¿Qué bases o elementos tenían estos especialistas políticos para fundar su optimismo?

Uno estaría tentado a pensar que estos y aquel estaban hablando de realidades diferentes. Pero no era el caso, ya que ni siquiera se puede señalar que referían a temporalidades distintas que pudieran explicar expresiones diferenciadas de la democracia. Debe preguntarse, entonces, cómo es que se puede describir desde posiciones tan opuestas la relación que las poblaciones de la región están teniendo con la democracia.

El hecho nos sitúa ante las dificultades de interpretar las transiciones y reacciones sociales que están rodeando la marcha hacia las

nuevas democracias en Latinoamérica. Nuevas democracias que brotan del concepto de Huntington (1991) de la “tercera ola de democratización” iniciada por la “revolución de terciopelo” del Portugal de Mario Soares en 1974 y que, en nuestro caso, no datan sino de apenas dos décadas atrás –en el inicio de la década del ochenta, coincidiendo con el retiro de los militares a los cuarteles en una gama de países–.

The Economist (2001) en realidad estaba haciendo la lectura de los resultados de la encuesta del Latinobarómetro publicada ese año, y los comparaba con los de años previos. A la pregunta de si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en 1996 el 61% de los latinoamericanos encuestados en 17 países respondió afirmativamente. Para el año 2001, la proporción se desplomó hasta el 48%. ¿Se puede concluir de aquí que los latinoamericanos están renunciando en su apoyo a la democracia o, si se prefiere como afirma el periódico, que el apoyo a las dictaduras está en alza?

Del lado de Cheresky y Pousadela (2001), es verdad que las tradiciones autoritarias y populistas no campean como en el pasado, y que existe una cierta afirmación de los derechos políticos de libertad de voto, asociación, expresión, constitución de las instancias representativas y división de poderes. Empero, nada de ello nos indica que los valores de la democracia tienen ya raíces en Latinoamérica. De hecho, si uno siguiera el mismo Latinobarómetro tendría razón para, al menos, dudar cuando se habla de inclinaciones democráticas. Para empezar, algo debe indicar que las preferencias por la democracia se hayan reducido en los últimos años –como fue citado anteriormente–. Más aún, entre 1996 y 2001, la proporción de personas que declararon que les daba lo mismo un régimen democrático que uno no democrático ascendió del 16 al 21%, en tanto que la que no respondió o dijo no saber se elevó del 5 al 12%. Empero para el año 2003, el porcentaje de preferencia por la democracia se elevó al 53%, si bien la satisfacción con su funcionamiento no sobrepasa un paupérrimo 28%.

Estos números y estas oscilaciones pueden indicar cualquier cosa. Pero lo que no nos pueden señalar con certeza es que están creciendo las orientaciones por y de la democracia. Y para continuar en el contexto vacilante de la realidad política, social y económica de América Latina, es muy recomendable enfatizar que los avances en los derechos políticos no vacunan contra retornos hacia el pasado.

Las evoluciones políticas recientes, cargadas de sobresaltos y giros inesperados en algunos países, expresan con otros argumentos que las interpretaciones tienen que ir con más cuidado. Consideremos primero los casos de Venezuela y Ecuador, donde dos militares han tomado el poder –el general Hugo Chávez y el coronel Lucio Gutiérrez,

respectivamente¹. A pesar de que ambos lo hicieron por la vía de las elecciones y la conquista de las mayorías, el hecho es que basaron su estrategia de ascenso político en sendos golpes de Estado, fallidos, pero suficientes para catapultarlos a la escena del protagonismo público. Podremos apuntar a favor que uno y otro ganaron y se mantienen en el poder –esto último en el caso de Chávez, aunque todo apunta a que hacia allí gira el novel gobierno del coronel Gutiérrez– gracias a discursos populistas y coaliciones amplias del mismo tinte.

Mas dos hechos, uno de cada lado, multiplican los interrogantes. En el caso de Venezuela, Chávez no ha podido gobernar sino sobre un país dividido, que ha escindido violentamente no sólo a los estratos dominantes –empresariales, políticos y militares– sino a la clase trabajadora misma. La división es de tal magnitud que las instituciones y los valores de la democracia están siendo puestos a prueba². En el caso de Ecuador, Gutiérrez es producto de un país convulsionado no sólo económica sino políticamente. ¿A qué grado puede llegar su inestabilidad que en los últimos seis años ha visto desfilar seis presidentes? Más aún, uno de estos gobiernos fue, aunque por breves momentos, de naturaleza puramente militar: el que encabezó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Mendoza, cuando el propio Gutiérrez le cedió su posición en el Triunvirato del golpe de enero del año 2000³.

1 El domingo 24 de noviembre de 2002, Gutiérrez ganó la presidencia por la vía de las urnas. Militar retirado, dirigente de su propio movimiento –el Partido Sociedad Patriótica 21–, ganó la presidencia con el 54% de los votos gracias a un discurso populista. Apuntalado por una singular mezcla de organismos y fuerzas de los marginados e indígenas, llegó con otra gran expectativa popular a cuestras: la de responder a los aplazados problemas de los pobres. Un indígena pachakutik resumió a los medios: “Vea, mi señor, yo creo que vamos a mejorar, pero para eso debe de cumplir lo que prometió a los pobres. Si no lo hace, va a tener problemas como cualquier otro que llegó” (*Clarín*, 26 de noviembre de 2002).

2 De diciembre de 2002 a enero de 2003, Venezuela estuvo semiparalizada por una huelga general convocada por opositores al régimen. El paro fue la culminación de los enfrentamientos entre los partidarios de Chávez y sus opositores, que tuvo un punto álgido previo en el minigolpe de Estado del 12 de abril.

3 El golpe de Estado dirigido por el coronel contra el gobierno de Jamil Mahuad tomó el poder y constituyó un Triunvirato integrado por él mismo, el dirigente indígena Antonio Vargas y el ex ministro Carlos Solórzano. A las tres horas de integrado, Gutiérrez abandonó su puesto, cediéndoselo a Mendoza. Así es la inestabilidad política de la región. Esta es la breve pero intensa historia que ahora continúa –porque no podemos decir que finaliza– con la elección del coronel Lucio Gutiérrez:

- En 1996, tomó el poder Abdalá Bucaram. Un extravagante político que pretendió combinar un discurso populista con drásticos programas de ajuste. Incluso peor: desde su arribo al poder, pretendió combinar la administración con su afición al canto –se dio a la tarea de tratar de grabar un disco–, lo que terminó de agotar la paciencia de sus opositores en el Congreso. Este, apenas seis meses después de iniciar

En fin, desde cualquier postura que se adopte respecto a estos gobiernos –sea de rechazo o simpatía–, el hecho es que su origen es militar. Y por ello el elemento inmediato que decanta es que los militares no se han quedado en los cuarteles en todos los casos y en todos los países. Están regresando al poder, así sea con la bandera de las causas populares y por la vía de las urnas. En tanto, según el “Índice de Desarrollo Humano” de la ONU en 2003, Venezuela exhibe la mayor cantidad de población por debajo de la línea de pobreza (32% para 2001, que es el último año incluido en este informe) en relación con los otros países objeto de este estudio, como Brasil, Argentina y México.

Otro es el caso de la Argentina, más reciente. Diciembre de 2001 pasará a la historia latinoamericana como la fecha en que se abrió una nueva debacle política, económica y financiera en la región y otra prueba profunda para las transiciones democráticas. En tan sólo once días, entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre de ese año, salieron del país 26 mil millones de dólares. En medio de presunciones de abusos de poder, robos y fraudes, el presidente De la Rúa dejó el gobierno, el sistema de convertibilidad monetario argentino se desplomó y, junto con él, se derrumbaron el peso y todos los indicadores vitales de una economía sostenida con alfileres en los últimos años.

La gente observó cómo el escaso dinero en sus manos perdía todo valor, mientras los pequeños y medianos ahorristas e inversionistas se quedaron presos y sin ningún centavo ante los alambres del “corralito”⁴. La crisis económica se abrió de capa y devino pronto en social y política.

su mandato, lo destituyó del cargo argumentando una presunta “incapacidad mental para gobernar”.

- Destituido Bucaram, la vicepresidenta Rosalía Arteaga se proclamó presidenta. Duró en el cargo dos días.
- El presidente del Parlamento fue nombrado al frente del Poder Ejecutivo del país. Una consulta popular en 1997 lo ratificó en el cargo, en el que se mantuvo dieciocho meses.
- Ganó las elecciones y ascendió, entonces, Jamil Mahuad. A pocos meses de su asunción, la crisis económica, el desempleo, la inflación y el anuncio de la dolarización de la economía desembocaron en una crisis política. En enero de 2000, el coronel Gutiérrez protagonizó el levantamiento ya descrito que llevó a la salida del presidente.
- Asumió el Triunvirato liderado por Gutiérrez, y este cedió su puesto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El domingo 24 de noviembre de 2002, los ecuatorianos acudieron por octava vez a las urnas y eligieron al coronel Gutiérrez.

4 El “corralito” fue el sistema de protección de los recursos financieros que utilizaron los bancos. En términos simples, los bancos congelaron cuentas y ahorros, y cerraron sus puertas para protegerse de la multitud enardecida que exigía sus fondos. El control de cambios, la devaluación brusca de la moneda y el “corralito” constituyeron las caras visibles de la debacle de las finanzas nacionales (*Clarín*, diversas ediciones de diciembre de 2002).

Las elites políticas del país pasaron a arrojarse la presidencia como una papa caliente; masas de desposeídos, desempleados y trabajadores tomaron las calles, asaltaron tiendas y comercios clamando por el retorno de la estabilidad, el respeto a la democracia, el castigo de los culpables; los hospitales y las compañías aseguradoras se encontraron con un aumento inusual de las enfermedades y muertes por infarto, padecimientos nerviosos, estrés y depresiones colectivas. Con un aparato productivo semiparalizado, el desempleo abierto alcanzó al 21% de la población económicamente activa (PEA). Los reportes señalaron que la pobreza se había elevado al 50% y que el 40% vivía del subempleo.

Académicos y comunicadores, ante la falta de referentes para entender lo que pasaba, formularon y debatieron sobre una pregunta lapidaria: ¿era una crisis más o se estaba frente al colapso definitivo de la nación?⁵ A la distancia advertimos que este no estaba tan próximo, ya que ni la nación ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hundieron. En el año 2003, los argentinos eligieron a Néstor Kirchner, sepultando los intentos de retorno del grupo político del ex presidente Carlos Menem. El futuro económico del país es aún un interrogante, pero con Kirchner la recuperación se ha iniciado en medio de un reagrupamiento de las expectativas sociales.

Pero si lo que tomamos son los casos de Brasil y México, la realidad a observar presenta matices diferentes. El triunfo de Luis Inácio “Lula” Da Silva en Brasil en el año 2002, un obrero de un partido de obreros, ha sido tan sorprendente y refrescante para la realidad sudamericana como lo fue el triunfo de un candidato y un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, luego de siete décadas de “dictablanda” –en la definición exacta de Vargas Llosa–. El impulso a las instituciones y valores de la democracia de estos resultados electorales parece indudable. En Brasil, llegan al poder un personaje y un partido, el Partido de los Trabajadores (PT), que fueron vitales para el fin de la dictadura militar de 1960-1983 y la restauración de la democracia. Lo hacen concitando una votación masiva récord en la historia del país. ¿Es una participación social que se puede considerar como apoyo o preferencia, si se quiere, por la democracia? Ya lo veremos a lo largo de estas páginas.

En tanto, Lula enfrenta el reto de gobernar la nación más grande, desigual y endeudada de la región. La deuda, que al año 2003 ascendía a 238,4 mil millones de dólares, se lleva el 8% del PIB y representa el 47% de la riqueza nacional. En una población de 173 millones de habitantes, 53 millones viven con un ingreso de un dólar por día, el 13% es analfabeto, el 47% no tiene acceso a la salud, el 23% no tiene servicios

5 Palabras de la Dra. Marta Novick en entrevista sostenida con el autor el 29 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

de agua, el desempleo informal es de los más elevados del continente, y el desempleo cubre a 14 millones de personas⁶. Estos millones sumidos en la pobreza y la marginalidad son los que esperan ansiosos que la democracia les haga justicia sin excusas. Argumentan y replican de una manera sencilla que “la democracia formal en Brasil ya la conocemos. Es nuestra hora de la democracia real. Es la hora de la democracia social, que vendrá con Lula”⁷.

En tanto, en el primer año de gobierno de Lula el país ha tenido el más bajo crecimiento desde 1998, las tasas de interés se situaron en un 22% y el desempleo victimizó al 13% de la PEA. De ahí que tan sólo en el tercer trimestre de 2003 la popularidad del presidente descendió en 6 puntos, del 76 al 70%.

Del lado de México, por primera vez en su historia moderna –primero, en 1997, al ciudadanizarse los órganos electorales y, luego, con la alternancia del año 2000–, la sociedad accede a elecciones libres, sin control estatal y, por tanto, sin las posibilidades de amañamiento y fraude que campearon y mantuvieron en el poder a un sistema de partido único por cerca de setenta años: el sistema del PRI.

Sin embargo, a juzgar por la caída en la popularidad del presidente Vicente Fox en México, la población estaría mostrando signos de desencanto con los logros de la democracia. En efecto, entre diciembre de 2000 y el mismo mes de 2002 –es decir, en los dos años de gobierno–, la popularidad de Fox ha caído del 7,7 al 6,5%⁸, cuestión motivada en parte porque la economía se ha semifrenado y el gobierno “del cambio” no ha sido capaz de cumplir sus promesas. La administración del centro-derechista Fox vive en la paradoja. Tiene los mejores indicadores de estabilidad de precios, moneda, cuenta pública y cuenta externa de los últimos treinta años –esto es, tiene bajo control los pilares básicos que dicta la biblia del mercado–, y sin embargo el crecimiento económico no llega al 1% promedio en sus tres años de ejercicio.

Paradojas para la historia: el gobierno de la alternancia y la democracia en México tiene poco para entregar en resultados económi-

⁶ Datos recabados en *Folha de São Paulo* en diversas ediciones entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2003.

⁷ Palabras de un dirigente del Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre en una reunión sostenida por el autor con el grupo de dirigentes sindicales de la región en las oficinas del sindicato, el 24 de noviembre de 2002.

⁸ Es decir, 7,7 era la popularidad del presidente Fox al inicio de su mandato. Un estudio de opinión de la Presidencia de la República reveló estos datos y que un 29% de los que votaron por Fox cambiaría el sentido de su voto; el 56% de la población encuestada refirió que el país se encontraba en un mal camino y hubo una división de opiniones de 50/50 en torno a la satisfacción con el gobierno “del cambio” –como se hizo llamar la administración del primer ejecutivo salido de la oposición– (*La Crisis. Semanario Político*, 2002).

cos, mientras las economías de los primeros mil días de gobierno de las administraciones setentistas priístas –tan populistas como antidemocráticas– de Echeverría y López Portillo avanzaron a tasas de más del 6% por año (Covarrubias V., 2003).

¿Cuáles son las promesas incumplidas de Fox? Las mismas que, en gran medida, comprometió Lula en Brasil. Las mismas que los políticos de la región, con más o menos variaciones, comprometen para conquistar la voluntad popular y ganar el poder, a tono con las realidades de pobreza, desigualdad, falta de empleo y falta de ingresos que permean desde Baja California en México a Punta del Este en Uruguay: más crecimiento económico, más y mejores empleos, más y mejores salarios, más oportunidades y menos pobreza. ¿Será el presente de desencanto popular de Fox el futuro de Lula? Ya veremos.

Por ese motivo, lo que parece claro para algunos es que cuando los pobladores latinoamericanos están expresando su preferencia o rechazo a la democracia como forma de gobierno, están simultáneamente haciendo un ejercicio de evaluación de su satisfacción con ella.

Esta es la línea argumentativa que *The Economist* (2001) sigue para explicar la caída en las preferencias por la democracia. Los latinoamericanos están expresando una gran insatisfacción con el funcionamiento de la democracia: el Latinobarómetro (2003) revela –como ya dijimos– que sólo el 28% declara estar satisfecho con la manera en que la democracia se desempeña en la región. ¿Y de dónde proviene dicha insatisfacción? La versión más común afirma, ni más ni menos, que del movimiento económico.

Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, nota que el problema es que la población ata la economía a la democracia (*The Economist*, 2001)⁹. Mientras lo hace, con su actitud de rechazo o preferencia por ella revela su satisfacción con el curso de las economías –la nacional, la familiar, la personal–.

Si esto es así, tenemos entonces motivos para preocuparnos. Porque a contracorriente, subyace la inestabilidad económica congénita al modelo de capitalismo tardío, atrasado, estructuralmente dependiente de la región. No sólo ello; tenemos también un hecho más impactante e inmediato para la democracia misma. Esto es que en el regreso de la democracia y la inscripción de América Latina en la Tercera Ola, su transición presente ha coincidido con la oscilación

9 En este análisis, la actitud de enlazar economía y democracia revelaría otra parte de la naturaleza de la relación que los latinoamericanos mantenemos con las transiciones democráticas de la región. En países desarrollados, de economías y sistemas de gobierno más estables, las sociedades no tienden a establecer estas relaciones. Los niveles de apoyo a la democracia, cualesquiera que sean, tienden a ser más estables –con independencia de cuál sea el curso económico y las realizaciones del gobierno–.

económica y las políticas gubernamentales de ajuste más radicales de nuestra historia.

Para los anales del mundo, Latinoamérica y el Caribe aparecen como una de las regiones del planeta cuyo producto doméstico menos ha crecido, o más se ha frenado, en las últimas dos décadas. En los años ochenta, en lo que se denominó la “década perdida”, el producto de la región creció en un modesto 1,7% por año –apenas superior al raquítico comportamiento de los países africanos de la región del Sub-Sahara–. Muy lejos de la evolución que se vivió en los países del Pacífico y del Este Asiático (7,9% de crecimiento promedio anual); lejos de la evolución de Asia del Sur (5,6%) y, por supuesto, de los países de “ingreso elevado” (3,3%). En la década del noventa, la tasa media anual de crecimiento mejoró para obtener el 3,3%; pero todavía fue inferior a la obtenida por el conjunto de países de “ingreso medio” (3,6%); y nuevamente muy inferior a lo que ocurrió con los países del Pacífico y el Este Asiático (7,2%) y con los de Asia del Sur (5,6%) –regiones comparables con la nuestra apenas unas décadas atrás¹⁰– (ver Gereffi y Hempel, 1996).

Visto por países, la inestabilidad y desigualdad de la evolución económica resultan mayores. Argentina, por ejemplo, creció negativamente entre 1980 y 1990, pero más favorablemente entre 1990 y 2000 (-0,7 y 4,3% anual, respectivamente). Algo similar ocurrió en Perú, Uruguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Nicaragua y Guatemala. En cambio, en países como Venezuela, Haití y Jamaica, el crecimiento es negativo, o escasamente se aproxima al 1% en las dos décadas. En los primeros años de este siglo, el PIB apenas si roza un crecimiento del 1% en toda América Latina, mientras sus mayores naciones –como México y Brasil, Venezuela y Argentina– entran en las etapas de vaivenes que apenas atestiguamos.

La otra realidad conexas es que la región ya tiene más de dos décadas de programas económicos de ajuste (desde 1975, si atendemos el caso chileno). Por una gama de razones –pero las más ligadas con los conceptos radicales de liberalización económica, contracción del gasto social, restricciones salariales, crecimiento de la deuda externa y de su servicio que acompañan estos programas–, las tasas de desigualdad y los hogares evaluados como pobres se han incrementado en todos los países a excepción de Uruguay –y a pesar de que en los primeros años de la década del noventa, en países como México, Argentina, Venezuela, Chile y Bolivia se redujo un poco la pobreza gracias a tasas positivas de crecimiento, control inflacionario y aumentos del empleo y los salarios– (Garretón, 1999).

¹⁰ Todos los datos han sido tomados del “World Development Indicators” para el año 2002 del Banco Mundial, <www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html>.

América Latina y el Caribe conforman una región con 524 millones de habitantes cuyo ingreso per cápita es de US\$ 3.560 anuales, un crecimiento del producto de bienes y servicios que escasamente supera el crecimiento de su población (2,7 contra 1,5% en 2001), extensiones de marginación e indigencia que llegan a abatir a cerca o más de la mitad de los habitantes y un 11% de la población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir.

Cuadro 1
Magnitud de la pobreza y la indigencia en América Latina, 2002 (en %)

Población bajo la línea de pobreza*	Población bajo la línea de indigencia
43,80	18,50

Fuente: CEPAL (2002b).

* La población bajo la línea de pobreza incluye a los que están bajo la línea de indigencia o de extrema pobreza.

Peor aún: el nuevo siglo ha comenzado en la región bajo una gama de calamidades económicas y sociales. Alentado o no por los eventos del 11 de septiembre de 2001¹¹, la respuesta guerrerista de la Casa Blanca y George W. Bush, y el nuevo enfriamiento económico mundial, el hecho es, reiteremos, que países enteros como la Argentina se han precipitado al vacío; en otros, como Venezuela, la crisis económica se enlaza con una crisis política y social; y aun en los países mayores que han tenido una cierta estabilidad reciente, como México y Chile, o menores sobresaltos, como Brasil y Perú, el horizonte se encuentra nublado de compromisos financieros, dudas económicas y desempleos y empleos precarios en alza.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Reconociendo este difícil entorno económico y social, y admitiendo que la preferencia por la democracia ha seguido un curso oscilante en medio de una extendida insatisfacción con ella¹², ¿esto significa que existe una crisis en las orientaciones políticas de estas sociedades que pone en riesgo la democracia misma? Se trata de una pregunta que flota aquí y allá, pero que aún no tiene respuesta.

11 Los medios de comunicación identificaron así a los atentados terroristas contra EE.UU. en septiembre de 2001.

12 El apoyo o preferencia por la democracia desciende notablemente, aun en los países más grandes de la región. Entre 1996 y 2003 en Brasil baja del 50 al 35%; en Colombia, del 60 al 46%; en Chile, del 54 al 50%; en Argentina, del 71 al 68%. Empero, en Venezuela sube del 62 al 67% y en México se mantiene en 53% (Datos de Latinobarómetro, diferentes años, <www.latinobarometro.org>).

De ahí que, asumiendo que existe una insatisfacción social con la democracia, debemos avanzar en preguntarnos y entender cuál es en realidad la hondura o la intensidad de esa insatisfacción, sino es desencanto. En este sentido, en el presente estudio pensamos que si hemos de avanzar en entender para actuar, precisamos investigar lo que ocurre al interior de los distintos estratos sociales y, en particular, en los más importantes por su posición en el proceso productivo. Nos referimos a los trabajadores asalariados. ¿Qué ocurre con sus percepciones políticas? ¿Comparten la insatisfacción o el desencanto? Nadie, ni el Latinobarómetro, ofrece respuestas a estos interrogantes. Nuestro trabajo se dirige a aportar en este terreno.

Estas preguntas sobre los trabajadores son las más pertinentes, ya que ellos siguen siendo el alma de la vida económica y social de América Latina. Son millones, cuya fuerza laboral creció en los primeros años del nuevo siglo a mayor ritmo que la población misma (2,2 contra 1,5%, respectivamente); masas más o menos disciplinadas, organizadas, de empleados, cuyas mayores aportaciones al producto interno se ubican en la industria (el 50,4%), seguida por los servicios (el 44,6%) y terminando en la agricultura (el 5%), según datos del Banco Mundial (2001). Pero los trabajadores de esta manera, en general, son una masa inmensa que, de acuerdo con el tema que nos ocupa, conviene segmentar por dos razones.

La primera es práctica, pues se requerirían el tiempo y los recursos que nosotros no tenemos para estudiarlos. La segunda es conceptual, y es la que nos indica que para un objeto de estudio como el nuestro, la separación y análisis de lo que ocurre al interior de los trabajadores más calificados, el corazón de la clase trabajadora, pueden ser más reveladores que generar evidencia para el conjunto de los trabajadores en general. Esta última es la propuesta que se formuló al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el año 2001 y que el jurado internacional del Concurso CLACSO-Asdi sobre *Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe* tuvo la generosidad de aprobar. De hecho, es gracias al apoyo de CLACSO otorgado a este proyecto, en la modalidad de becas para investigadores *senior* de la región, que este estudio fue posible.

Recuperemos el hilo de la racionalidad de este estudio.

Los obreros industriales de las manufacturas de punta de la región, automotriz y eléctrica-electrónica, siguen ocupando un lugar central en el conjunto de la clase obrera industrial. Este lugar central está definido por la importancia de ambos sectores en la industrialización de nuestros países y por las subjetividades obreras que históricamente han generado sus procesos de manufactura (Henderson, 1994; Berggren, 1992; Tuman y Morris, 1998). Al pertenecer a industrias altamente intensivas en capital y conocimiento, los obreros automotrices

y electrónicos se han definido como los más calificados dentro de las actividades manufactureras. Al contar con el factor numérico que les brinda el ser parte de grandes centros fabriles, han podido organizarse y establecer patrones de sindicalización y reivindicación para el conjunto de la clase trabajadora¹³.

En adición, su lugar en la configuración y reconfiguración de los sistemas políticos de la región ha sido indiscutible. Como fue señalado por diversos especialistas, el movimiento obrero en América Latina ha sido un actor pivote en la formación y cambios de los sistemas políticos. Ello se ha debido a su capacidad de acción colectiva –esto es especialmente cierto para los trabajadores situados en los sectores estratégicos de las economías; en ellos, la estabilidad y el crecimiento de las industrias devienen en un asunto de importancia económica y política para los estados y los líderes– y la significancia política de la organización y la protesta obreras, que se realizan por las características del capitalismo regional; una economía y un mercado de trabajo débil, que llevan al movimiento obrero a buscar en la esfera política lo que aquella economía y aquel mercado le restan a nivel de la contratación colectiva; un Estado que, frente a su debilidad *vis-à-vis* el capital extranjero y las limitaciones de los sistemas políticos y las libertades individuales, complementa su legitimidad apelando al movimiento obrero, el populismo y el nacionalismo; y la ausencia de una clase capitalista fuerte, al estilo de las clases existentes en los países centrales (ver Collier y Collier, 1991).

Por ello, las orientaciones laborales y políticas de los obreros calificados los han colocado a menudo a la cabeza de la lucha por la democracia, tanto dentro como fuera de los lugares de trabajo, y los han llevado a liderar el movimiento obrero organizado y los esfuerzos por impulsar una más justa distribución de la riqueza. Esto ha sido particularmente evidente en países como Brasil, donde los obreros metalúrgicos de la región del ABC estuvieron al frente de las luchas sociales por restablecer la democracia y terminar con los regímenes militares, y continúan hasta hoy con un papel protagónico en la lucha social contra las políticas económicas de contención de costos laborales y libre mercado a ultranza (Moreira Cardoso, 1995; Castro Araujo, 1995; French, 1992).

Pero también lo ha sido –aunque con intensidades y variaciones diversas– en México, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, donde sus niveles de actuación laboral y política rebasan a

13 Los obreros de industrias como la automotriz han establecido tradicionalmente modelos de relación laboral y de pago, uso y movilidad de la fuerza de trabajo que han servido como base para las negociaciones laborales en otras industrias. Por eso, la literatura especializada de estudios del trabajo los identifica como *pattern setters* o fijadores de patrones de relación laboral (ver Kochan et al., 1994; Hyman, 1996).

menudo los del resto de la clase trabajadora (De la Garza, 1996; Zapata, 2003; Collier y Collier, 1991).

Por estas razones, las orientaciones laborales y políticas de los obreros metalúrgicos, automotrices y electrónicos han sido y siguen siendo de la mayor relevancia.

Existe también una razón ligada a los centros de trabajo, que pone en mayor relieve su selección estratégica en nuestro objeto de estudio. Con el inicio y desarrollo de los programas de ajuste económico neoliberal en la región y la transformación de los lugares de trabajo siguiendo las pautas de la flexibilidad, la contención de costos laborales, la subcontratación y la marginalización de los sindicatos, no sólo entró en crisis la relación Estado-sindicatos, sino también el sindicalismo latinoamericano, al tiempo que pasaron a desinstitucionalizarse las relaciones laborales corporativistas y/o populistas. Cook (1995) nota que este proceso ha implicado tres mutaciones: la declinación de instituciones formales en las que los sindicatos habían participado tradicionalmente, y su sustitución por pactos Estado-empresarios; cambios de facto y de derecho en la legislación laboral a fin de promover la flexibilidad laboral y reducir la militancia obrera y la disminución de la presencia sindical en los partidos políticos, particularmente en los de corte oficial-estatal.

De este modo, la crisis sindical que atraviesa a países y regiones se expresa en las dificultades de los organismos sindicales para mantener las conquistas obreras, defender el poder adquisitivo de los trabajadores y extender las prácticas de organización y contratación colectivas (Covarrubias V., 1992; Bensusán y García, 1992; Cook et al., 1994).

De ahí que una cuestión crucial para la investigación social, y no sólo para este estudio, es advertir si los impactos sobre los niveles de ingreso y de vida de la clase trabajadora que son producto de cerca de dos décadas de transformación económica bajo políticas neoliberales –así como las dificultades de las transiciones democráticas de la región para traducir la democracia en igualdad y oportunidades para todos– están generando cambios profundos en las orientaciones políticas y laborales de los obreros industriales.

Presumiendo que estos cambios existen, ¿cuál es su naturaleza? Si la naturaleza de estos cambios se acerca al desencanto, entonces ¿sus orientaciones laborales y políticas (actitudes, participación organizada y acciones) están en crisis –crisis de orientaciones respecto de sus sindicatos, y de la vida política de sus localidades y países; de identidad respecto de los valores obreros *vis-à-vis* los valores de las gerencias; de convicciones respecto del valor de participar y actuar en la vida laboral y política–? De ser el caso, se estaría profundizando la propia crisis sindical de América Latina respecto de la capacidad de las organizaciones obreras para representar y defender los intereses obreros, y se estarían poniendo

riesgos adicionales a la transición y estabilidad de las instituciones democráticas que tan penosamente se han ido construyendo en la región.

En cambio, de no ser el caso, entonces las preguntas centrales de este estudio persisten: ¿cuál es la situación actual de las orientaciones laborales y políticas de los obreros de vanguardia de la región? ¿Continúan siendo un baluarte de las identidades colectivas en los diversos segmentos de asalariados? Y sobre todo, ¿puede ser la identidad colectiva de estos obreros calificados un valladar contra el desencanto por el funcionamiento de la democracia y las oscilaciones sociales que permean en sus países? Responder estos interrogantes es el objetivo que perseguimos.

La hipótesis que mantenemos es que, pese a caídas y retrocesos, las identidades colectivas de estos obreros se mantienen al lado de un conjunto de capitales políticos y sociales que son mayores que los del resto de sus sociedades. Sostenemos también que esas identidades pueden ser un soporte para consolidar las transiciones productivas y políticas que requiere el desarrollo moderno de nuestros países.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Nuestro plan de trabajo consistió en indagar y obtener evidencia de los obreros en cuestión de los países de la región que cuentan con una mayor base industrial metalúrgica y electrónica. Estos países son México, Brasil, Argentina y Venezuela.

Los datos que generamos son cualitativos y cuantitativos. Cualitativamente, se condujeron entrevistas con dirigentes sindicales de los cuatro países, en oficinas y centros de trabajo. Adicionalmente, se asistió a asambleas sindicales en México, Argentina y Venezuela en donde se efectuaron observaciones de las interacciones sindicales y se recabó información documental de las dirigencias. También se realizaron entrevistas con académicos de los cuatro países.

Empero, la evidencia recabada fue principalmente de orden cuantitativo. Proviene de una encuesta sobre orientaciones laborales y políticas en base a muestras no representativas de obreros de plantas automotrices y electrónicas de regiones industriales de Hermosillo, Nogales y Puebla en México, Valencia en Venezuela, Porto Alegre en Brasil y La Matanza, San Nicolás y Villa Constitución en Argentina. En México se levantaron un total de 114 encuestas útiles; en Venezuela, 102; en Brasil, 59 y en Argentina, 85¹⁴. La aplicación de encuestas se efectuó entre junio de 2002 y junio de 2003.

¹⁴ Esto significa que se aplicaron más encuestas. Pero en todos los casos hubo encuestas “perdidas”, por contener una magnitud irrecuperable de datos incompletos. Por ejemplo, en México se aplicaron cerca de 130 encuestas.

Es muy importante subrayar que no realizamos un ejercicio estadístico representativo, de manera que no se debe perder de vista que las conclusiones y hallazgos sólo tienen una validez limitada, acaso extensible a las regiones de los obreros en muestra¹⁵. Nuestro propósito es –a través de la evidencia y la discusión generada– poder aportar vetas de estudio y crear un soporte sobre el que puedan avanzar investigaciones ulteriores.

El apartado de orientaciones laborales de la encuesta se apoyó en un diseño previo utilizado por el autor, indagando por las siguientes temáticas: ingreso subjetivo y percepciones de bienestar, satisfacción en el trabajo, compromiso organizacional (CO) –es decir, sentido de pertenencia, disposición al esfuerzo, funcionamiento e identificación de los grupos de trabajo, identidad valorativa– y compromiso y participación sindical de los obreros. El apartado de orientaciones políticas se diseñó con base en una reformulación de ítems selectos de *The World Values Survey*, la encuesta del Latinobarómetro; la encuesta sobre modernidad individual y participación política de Inkeles (1993); y la encuesta de valores ante la libertad de Gastil (1993). La encuesta aplicada –que puede verse en el anexo– fue traducida al portugués para el caso brasileño y “tropicalizada” para ajustar los términos a los lenguajes de cada país. Las entrevistas y observaciones cualitativas indagaron sobre estas mismas temáticas y sobre la evolución de la situación económica, laboral y política de los países.

El Cuadro 2 presenta un resumen de datos básicos de los obreros encuestados.

Cuadro 2
Datos estructurales de los trabajadores en estudio, 2003

Variable	Argentina	Brasil	México	Venezuela
Edad de los trabajadores (promedio)	41,6	37,7	33	36
Años de estudio (promedio)	Secundaria completa e incompleta*	9,12	11	11,47
Estado civil (% casados)	81	54	77	75
Antigüedad en el empleo (años promedio)	16	11,6	9,6	9,3
Ingreso promedio mensual (US\$)	300	215	618	358

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta aplicada en los cuatro países.

* En Argentina no fue posible obtener un promedio simple, dado que la gente no está acostumbrada a responder por años de escolaridad, sino por “máximo nivel de estudios que posee”. Por tanto, el nivel de estudios reportado corresponde a la “moda” estadística o grado máximo de estudios que fue reportado con mayor frecuencia.

15 Nuevamente, un estudio representativo y de mayor validez será la tarea a emprender de inmediato. Será necesario empezar por localizar los recursos y el tiempo que estuvieron fuera del alcance de este proyecto.

Los datos básicos de la relación laboral comprueban el perfil de vanguardia de los obreros que tenemos en muestra: una relación laboral estable, o más estable que la del resto de los trabajadores, y percepciones salariales que rebasan la media de sus países.

La mayoría de los trabajadores, en los cuatro países, cuenta con contratación permanente o de base. El hecho es excepcional, ya que los cursos que toma el capitalismo global se traducen en cambios que tienden a afectar la estabilidad en el empleo (Smart, 2000), de donde resulta que una gran cantidad de trabajadores en América Latina han perdido el trabajo o han pasado a engrosar las filas de la economía informal; la seguridad laboral de estos obreros emerge como una de las últimas trincheras de empleo estable de la clase trabajadora. Pero incluso dentro de ellos no se trata de una situación generalizable. Dentro de nuestra muestra de obreros, el 21% de México y el 24% de Brasil tienen contratos por tiempo determinado, subcontratos o son trabajadores eventuales. Los trabajadores de Argentina y de Venezuela guardan en mayor proporción contratos permanentes.

El hecho se refleja mejor en la antigüedad en el empleo. Las medias indican que los años de trabajo en la empresa van de un mínimo de 9,3 años –caso de Venezuela–, a un máximo de 16 años –caso de Argentina–. Ocurre que las antigüedades reflejan también, de alguna manera, el tipo de industria que se ha emplazado en cada país, y que las muestras en estudio captaron. Tomemos el caso de México, que presenta una mezcla interesante de trabajadores automotrices y electrónicos. La antigüedad de los trabajadores automotrices es mayor, pero la presencia de obreros como los que entrevistamos de la industria maquiladora electrónica del norte del país empuja hacia abajo la antigüedad media. En efecto, estas son industrias en las que las rotaciones de personal tienden a ser elevadas, tanto como las oscilaciones productivas de estas plantas ensambladoras, que son instaladas para proveer principalmente al mercado estadounidense (Carrillo, 2004; Ramírez, 1999).

La edad de los trabajadores se corresponde con esta antigüedad relativa a la trayectoria industrial. Los trabajadores mexicanos son los más jóvenes y, en el otro extremo, los argentinos no sólo son los que tienen mayor antigüedad, sino los que tienen más edad. En el caso argentino, el hecho se asocia con el tipo de industria de donde provienen –siderúrgica y automotriz, principalmente– así como con las regiones industriales con gran trayectoria económica –La Matanza, San Nicolás y Villa Constitución–.

En suma, estamos ante grupos de trabajadores con muchas características comunes. Obreros adultos, bien avanzados los 30 años, principalmente casados, con una trayectoria laboral considerable dentro de sus firmas, con estudios secundarios completos promedio que, en

algunos casos, han alcanzado grados académicos medios superiores. Estos datos estructurales confirman la selección que guía este estudio: obreros calificados, con una estabilidad en el empleo importante, y con las responsabilidades familiares que otorga el estar casado, ser el principal ingreso del hogar y tener hijos.

PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

El texto se organiza en seis capítulos (más la presente introducción). En el capítulo I se expone un modelo para el estudio de las orientaciones laborales y políticas de los trabajadores. Parte de una revisión y discusión de cierta extensión de algunos de los autores y teorías contemporáneas más pertinentes sobre la formación y transformación de las visiones sociales, las mediaciones culturales, la formación de identidades y la constitución de capitales laborales, políticos y sociales. Enseguida se formula una propuesta multidimensional para el análisis (identificación y ubicación de determinantes o factores de mediación) de las orientaciones obreras.

Las orientaciones laborales se identifican por el ingreso subjetivo y las percepciones de bienestar personal y familiar, la satisfacción en el trabajo, el CO, y el compromiso sindical (CS). Las orientaciones políticas se reconocen por la satisfacción y preferencia por la democracia, los capitales políticos de los obreros, las redes de acción y participación de estos, y la unidad percibida en las comunidades.

Proponemos entonces seis dimensiones complejas como factores mediadores de estas orientaciones: las culturas nacionales; el grado de modernidad o tradicionalidad de los perfiles obreros; la confianza como elemento explicativo de los capitales sociales; las características de los sistemas de relaciones laborales e industriales, la economía y la evolución del bienestar; las relaciones de poder en los centros de trabajo; y los isomorfismos identitarios.

Estos componentes de nuestro modelo de análisis se utilizaron para organizar –y, en tal sentido, ayuda a entender– el resto de la exposición del estudio.

El capítulo II brinda una versión de la articulación entre regímenes políticos y sistemas de relaciones industriales (SRI) en los cuatro países. Se trata de una exposición oportuna, ya que permite recordar cómo la historia importa y, en ella, las múltiples relaciones entre política, industria, movimiento obrero, partidos y lucha por el poder en nuestros países. Con Collier y Collier (1991), se recuperan los períodos de “incorporación” –es decir, el momento en que el movimiento obrero es legitimado y articulado a los proyectos políticos de las elites dirigentes–, como coyunturas críticas que legarían muchos de los contornos decisivos de las relaciones de subordinación/conflicto entre el Estado y

el movimiento obrero. El espectro quedaría definido: la incorporación estatal en Brasil daría lugar a un sistema fragmentado de partidos y de relaciones laborales, con una gran independencia y una fortaleza creciente del movimiento obrero. La incorporación partidaria, populista laboral en Argentina, populista radical en México y Venezuela, generaría resultados diferenciados: un sistema político paralizado y un movimiento obrero subordinado en Argentina, en tanto en México y Venezuela legaría un sistema político integrativo y unas relaciones de trabajo corporativizadas.

La herencia histórica es rastreada hasta el presente. Brasil y México acercan sus cursos; evolucionan de la polarización (Brasil) y la integración (México) a la funcionalidad de sistemas políticos y de relaciones de trabajo divididos. Argentina y Venezuela, a pesar de sus distintas legacías, cierran trayectorias hacia puntos convergentes; oscilan de la integración a la polarización y parálisis política y laboral.

El capítulo III centra la observación en las dos últimas décadas de historia económica y política, cuando el modelo previo de desarrollo entra en crisis y se experimenta una lucha intensa por la transformación del mismo siguiendo las líneas neoliberales. Se expresa como lucha por el poder y es enmarcada por grandes resistencias sociales y laborales.

El análisis nos va acercando a los ambientes económicos y políticos en que tiene lugar la vida obrera y cobran sentido, por tanto, sus orientaciones políticas y laborales.

En México, la transformación del modelo económico fue radical gracias al sistema no democrático de ejercicio del poder, bajo las siglas del PRI. El arribo de la transición democrática terminó con el sistema integrativo y corporativizado, pero elevó los costos de la transición. Llegó al poder una elite conservadora socialdemócrata en la figura del Partido Acción Nacional (PAN) –no la izquierda nacionalista– y del sistema de partidos en competencia antes inexistente, y se pasó a un sistema de gobierno en alta confrontación. En Brasil, se acentúa la fragmentación del sistema de partidos; ello, sumado a la presencia de fuertes tradiciones de desarrollo interno, al lado de un nacionalismo y una izquierda fortalecida alrededor del PT de Lula, erigen un muro de contención contra la transformación radical del modelo económico.

La parálisis y la confrontación dentro y fuera de los canales institucionales cobran tintes dramáticos en Argentina y Venezuela. En el primero, en medio de la sombra ominosa de la dictadura militar, el menemismo transforma abruptamente el modelo económico. Pero la guerra intestina por el poder y los resultados desastrosos en las cuentas públicas, el sistema financiero y la deuda externa al cambiar el siglo sumen al país en una era más de violencia, parálisis y desencanto. Con el

socialdemócrata Kirchner hay un renacer de las esperanzas y adviene otro paréntesis para la reconciliación nacional; mas la carga de décadas de yerros y saqueo económico que han menguado, cuando no hecho añicos, el nivel de vida de la mayoría del pueblo argentino, determina que persista un temor extendido por lo que pueda ocurrir mañana.

En Venezuela, se vive el acierto del derrumbe del sistema bipartidista indiferenciado de control político y social figurado por el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y la Alianza Democrática (AD). El presidente Chávez frena el neoliberalismo e introduce al país en una nueva era de populismo nacionalista. Pero los costos tampoco son neutros: la división y el enfrentamiento del país desgarran y mantienen en vilo a la nación. El interrogante es si el país no estará a punto de retroceder a los años de violencia y dictadura militar de la década del cincuenta o a los enfrentamientos armados de la década subsecuente.

El capítulo IV pone en números los resultados de estas dos décadas de transformación económica, política y laboral. El recuento es detallado: del PIB al empleo; de las finanzas públicas a los salarios; de la inversión a los precios; de la deuda a los ingresos, la marginalidad y la pobreza; del sindicalismo a los cambios en la contratación colectiva; de las huelgas a la modificación de las leyes laborales; etc. Los números se van agregando hasta ofrecernos una fotografía comparativamente comprensiva de lo acontecido en los cuatro países: todos han sido golpeados por las virulencias de las crisis económicas, los desaciertos de las conducciones gubernamentales y los costos sociales supuestos por la transformación neoliberal.

Pero el dramatismo de los problemas y lo perdido social y laboralmente es mayor en Argentina (un caso de extremo liberalismo) y Venezuela (un caso de desarrollismo y populismo radical). De ahí se ofrece una conclusión: es la mayor o menor estabilidad política la que parece ser más decisiva para la evolución económica y la suerte de los modelos de desarrollo. México (un caso de transformación neoliberal radical) y Brasil (un caso de transformación gradual) han sorteado mejor estos procesos *–vis-à-vis* Argentina y Venezuela–, gracias a su mayor estabilidad política.

Los capítulos V y VI muestran y desmenuzan la evidencia compilada *–mientras el V identifica y describe las orientaciones obreras, el VI avanza en analizar sus determinantes conforme al modelo explicativo propuesto–*. Siempre que fue posible, se comparan los resultados con evidencia proveniente de otras fuentes, en particular con los datos del Latinobarómetro. Juntos avanzan una gama de conclusiones y líneas de investigación futura. Se confrontan resultados y teorías para confirmar la tesis principal de este trabajo: es posible que los obreros de vanguar-

dia de la región porten aún las identidades colectivas y políticas que se requieren proyectar para el conjunto de nuestras sociedades desencantadas con las promesas incumplidas de la democracia.

AGRADECIMIENTOS

Como se mencionó anteriormente, este estudio fue posible gracias a la obtención de una beca en el marco del Concurso CLACSO-Asdi 2001 para investigadores senior sobre *Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe*. Agradezco profundamente su apoyo, en particular a Bettina Levy por su infatigable labor de seguimiento de esta investigación y de paciencia para ver sus resultados.

En cada país, un grupo de colegas y amigos hicieron posible la investigación y acompañaron la aplicación de encuestas. En Venezuela, Héctor Lucena de la Universidad de Carabobo; en Argentina, Marta Novick de Ceil-CONICET; en Brasil, Sonia Laranjeira de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y Adalberto Moreira C. de IUPERJ-Rio de Janeiro; en México, Xochitl Vega y Yari Borbón de El Colegio de Sonora. A todos ellos mi infinito agradecimiento.